



*Misión Permanente de la
República Bolivariana de Venezuela
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y demás Organismos Internacionales
con sede en Ginebra*

N° 0576 - 2021

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad de hacer referencia a su comunicación de fecha 25 de enero de 2021, suscrita por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, referida al "(...) supuesto acoso judicial contra la Jueza María de Lourdes Afiuni, en relación al ejercicio de su función jurisdiccional como Jueza del Tribunal 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas".

Al respecto, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, tiene a bien remitir adjunto al presente, constante de trece (13) folios útiles, un documento proporcionado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela -con sus respectivos anexos-, mediante el cual se da respuesta a las alegaciones contenidas en la mencionada comunicación.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, agradece a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la presente información sea sometida al conocimiento y consideración del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, aprovecha la ocasión para renovar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta consideración.



Ginebra, 18 de marzo de 2021

**Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos**
Ginebra

NACIONES UNIDAS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO SOBRE
PARA LOS DERECHOS HUMANOS



UNITED NATIONS
OFFICE OF THE UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

SPECIAL PROCEDURES OF
THE HUMAN RIGHTS COUNCIL

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Téléfax: (41-22)-917 90 06
Télégrammes: UNATIONS, GENEVE
Téléc: 41 29 62
Téléphone: (41-22)- 917 92 89
Internet : www.ohchr.org/english/bodica/hr/special/index.htm
E-mail: mdelalana@ohchr.org

Address:
Palais des Nations,
CH-1211 GENEVE 10

REFERENCE: G/SO218/2

21 de septiembre de 2010.

Excmo. Señor:

El Consejo de Derechos Humanos, por su resolución 6/4 adoptada el 28 de septiembre de 2007, titulada "Detención arbitraria", decidió prorrogar por un período de tres años el mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y le invitó, en el cumplimiento de su mandato, a que siguiese buscando y recogiendo información de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como de las personas interesadas, de sus familias o de sus representantes legales.

Quisiera referirme a la comunicación de fecha 17 de marzo de 2010 dirigida a su Gobierno sobre un caso de detención alegadamente arbitraria que habría ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela.

A la luz de lo que precede, y conforme al mandato que le ha sido conferido, el Grupo de Trabajo ha examinado el caso mencionado, teniendo en cuenta los elementos puestos a su disposición, y ha adoptado, el 1 de septiembre de 2010, su Opinión Nº 20/2010 (República Bolivariana de Venezuela) (copia adjunta). Esta Opinión será reproducida en el Informe que el Grupo de Trabajo presentará al Consejo de Derechos Humanos.

Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Embajador, los sentimientos de mi más distinguida consideración.

El Hadji Malick Sow
Presidente-Relator del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria

Excmo. Sr. Germán Mundarain Hernández
Embajador
Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Chemin François-Lehmann 18 a
Case postale 144
1218 Grand-Saconnex

(Fax: 022 723 28 81)

| |
|------------------------------|
| De: ... ante de Venezuela |
| Recibida el: 22/9 |
| Nº Control 4935 |
| Atendido en: |
| GMH FP |
| Firma |

esas medidas, entre las cuales estaban las aplicadas por la Jueza Afiuni Mora en el proceso contra Cedeño).

34. El cargo que se le formula de haber realizado la audiencia sin la presencia del Ministerio Público es del todo inconsistente: La audiencia debió haberse realizado el día que se había designado –el 8 de diciembre de 2009–, pero se suspendió a petición del Ministerio Público que quedó notificado de comparecer para a nueva audiencia, que se fijó a su propia demanda. Al no hacerlo, y luego de una hora de espera, la Jueza estuvo obligada a resolver.

35. A juicio del Grupo de Trabajo, la sustitución de la prisión preventiva por la de libertad bajo caución y con arraigo en el país, fue una determinación prudente que, junto con reconocer el derecho humano a ser juzgado en libertad, garantiza “la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. Resolver un asunto judicial dando cumplimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos no puede considerarse de modo alguno favorecimiento de la evasión, ni corrupción, ni abuso de autoridad y menos asociación para delinquir. Si el liberado logró fugarse no es responsabilidad del juez que lo liberó, y deberá buscarse las responsabilidades en quienes estaban obligados a impedir el abandono del país, como lo ordenó la sentencia.

36. A pesar que la fuente sostiene que la libertad del reo fue dispuesta por la Jueza “basándose en la Opinión Nº 10/2009”, lo cierto es que tanto la Jueza como el Gobierno coinciden en que ello no fue así. Efectivamente el Grupo de Trabajo adoptó esa Opinión y la mantiene, pues la prolongada privación de libertad esperando juicio por dos años y seis meses (en aquel momento) constituye la situación contemplada en sus Métodos de Trabajo como una detención arbitraria, categoría III. No obstante, es claro que al resolver como lo hizo, la Jueza, en su función de integrante de un Poder del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, dio cumplimiento al derecho internacional, lo que le ha significado que hoy sea, por ello, privada de libertad, paradójicamente, por otro integrante del mismo Poder del Estado.

37. Conviene agregar que la fuente señala que la jueza Afiuni “fue arrestada en la sede del tribunal por elementos de la Policía de Seguridad Pública adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (...) quienes no mencionaron ni el motivo de la detención ni qué autoridad la había ordenado. Los agentes policiales no mostraron orden judicial alguna”. El Gobierno en su respuesta califica estas afirmaciones como una “intención descarada de la fuente de inducir a error sobre la exacta apreciación de los hechos que llevaron a que se dictara orden de aprehensión”. Sin embargo, el Grupo nota que es el propio Gobierno quien confirma la versión de la fuente, al sostener que la orden de detención en contra de la Jueza Afiuni Mora fue depositada por la Policía en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Penales del Palacio de Justicia a las 8.00 de la noche de ese día, 10


EN SU NOMBRE
JUZGADO QUINCUAGESIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE
CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE APREHENDIDO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 250 DEL COPP

CAUSA N° 1.4270-09

JUEZ: **LEYVIS SUJEI AZUAJE TOLEDO**

FISCAL 56° M.P A NIVEL NACIONAL
CON COMPETENCIA PLENA: **DRA ALICIA MONRROY CARMONA**

IMPUTADOS: **MARIA LOURDE AFIUNI MORA
RAFAEL RONDON ROMERO
CARLOS LATUFFO ADRIAN**

DEFENSORES PRIV. : **DRA. TAILANDIA MARQUEZ
DRA. SANDY GUEVARA
DR. WILLIAM SANTAMARIA**

SECRETARIA: **ABG. LEYLING SANTAELLA**

En el día de hoy, Sábado (12) de Diciembre de 2009, siendo las 12:55 horas de la tarde, oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de la **AUDIENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE APREHENDIDO**, en virtud de la solicitud efectuada por la [REDACTED] Fiscal 56° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguidos los imputados **MARIA LOURDES AFIUNI MORA**, [REDACTED] [REDACTED] nombraron como su defensores privados libres de coacción y apremio a la [REDACTED] [REDACTED] quienes aceptaron el cargo y juro cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo. Encontrándose debidamente constituido el Juzgado 50° de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana [REDACTED]

Acto de audiencia y juicio

C. 3 (201)

¿cuántas boletas firmo y señalar cuál es la forma de su trabajo con respecto a la boleta? **Respondió:** Cuando se dicta una decisión de esa índole, llegamos a la oficina, siempre hay una persona encargada de hacer boletas, la secretaria tiene que terminar de imprimir el acta, la señora Ana yo le dije que me imprimiera una Boleta de Excarcelación, que se había acordado una medida de presentación cada 15 días, y prohibición de salida del país, la secretaria estaba terminando de pulir el acta porque ella no había entendido muy bien lo de la ONU, y yo le dije, yo no estoy decidiendo

en base a la ONU, estoy decidiendo en base a mi Constitución. **14-** Cuántas boletas de excarcelación firmo usted? **Respondió:** Firme 4 boletas con 4

oficios dirigidos al director del Disip y dos actas, originales y copia que la última vez que las vi fue en las manos el Dr. Daniel Medina, ciudadana secretaria deje constancia. **15-** Usted viaja con frecuencia a los Estados Unidos? **Respondió:** No una vez al año, el pasado y este, y estuve 8 días en

Europa con mi hija de regalo de 16 años cuya plata la guarde de mis utilidades, el pasaporte tiene dos viajes para Miami y uno para Europa, nos fuimos el 13 de Abril para Europa, yo le prometí a mi hija que la íbamos a pasar en su cumpleaños en París aunque sea un perro caliente. **16-** Usted le

dijo algo a los alguaciles que pudieran incurrir ellos en algo? **Respondió:** No lo que le dije fue a Rafa acompaña al señor al tribunal a firmar y después lo acompañas a la puerta porque no quiero escándalo en el

Palacio. **17-** Podría indicar el procedimiento normal que usted realiza cuando otorga una medida cautelar? **Respondió:** en este tipo de audiencia

me pronuncio oralmente y luego dicto la motiva, si me lo piden por escrito y no hay una audiencia rápida por decir, pon te tu que estemos en etapa de escabinos y me piden la revisión me pronuncio por escrito y le notifico a

todas las partes aquí se acordó notificarle al Ministerio Público para que él ejerciera su recurso, acuérdate que toda decisión de primera instancia siempre tiene el principio de la doble instancia y la revisión de medida está sujeta a un recurso de apelación, ese es el camino correcto. **18-** El acta que

aparece en el expediente sobre la audiencia que usted realizo, la audiencia de diferimiento, por decirle algo, estaba debidamente suscrita por usted?

Respondió: si yo la firme y la firmaron todos, la responsabilidad del acta es de la secretaria, la responsabilidad de la motiva es mía. Al momento que

EL UNIVERSAL

María Lourdes Afiuni, ex juez penal

“No me arrepiento de haber puesto en libertad a Cedeño”

“Sabía que me podían suspender, pero nunca imaginé que ordenarían mi detención”, dijo Afiuni. Además, aseguró que “en el Palacio de Justicia hay un grupo de jueces que acatan órdenes, pero nunca formé parte de él”.



La juez Afiuni dice que actuó ajustada a Derecho (Cortesía)

Contenido relacionado

- Una sentencia de muerte

Claro y preciso, el tono de voz revela seguridad en alguien que, sin embargo, permanece encerrado, desde hace siete meses, en un calabozo de seis metros cuadrados. La jueza Afiuni vive aislada y en constante peligro de muerte (14 presas del INOF, donde se encuentra, fueron sentenciadas por ella) y si bien ha superado el miedo y la claustrofobia, lamenta, más que su propia suerte, el haberle cambiado la vida a su hija, sus padres y sus hermanos, “quienes están presos conmigo porque viven en función de mi cautiverio”.

-¿Cree usted que la exhortación del Parlamento Europeo sobre su caso influirá en el Presidente para ordenar su libertad, si consideramos que liberaron a los periodistas García y Ramírez y se le levantó la inhabilitación a Gustavo Azócar?

-Es una pregunta muy difícil de contestar con el Presidente que tenemos. Si hubiese un Gobierno normal lo lógico sería que se acatara la exhortación, pero tampoco estaría yo detenida. El Presidente es impredecible. A lo mejor considera que mi libertad podría limpiar un poquito su imagen o quizás siga con su soberbia y me mantenga detenida.

-¿Lo ocurrido con los periodistas no pone de manifiesto un cambio de actitud?

-No creo que esas liberaciones, de la noche a la mañana, sean casuales. Suelta un caramelito y luego toma el garrote.

-En Cuba van a liberar más de 50 presos políticos por gestiones del canciller español y hay una exhortación de parlamentarios para que Moratinos actúe de manera similar ante el Gobierno venezolano acerca de su caso.

-Esos pronunciamientos ayudan. También los hubo en Uruguay y Paraguay. El problema es que ellos no saben cómo resolver el entuerto de mi expediente. Después de que él (Chávez) se pronunció en una cadena por el fusilamiento, luego de acusarme de favorecer una fuga y de reconocer la Fiscalía que no hubo corrupción, no saben cómo enderezar todas esas contradicciones sin que el Presidente quede mal. Pero, a pesar de todo, creo que tarde o temprano vendrá mi libertad.

-Después de siete meses de prisión, ¿no se arrepiente de liberar a Eligio Cedeño?

-Para nada. Por el contrario, me siento convencida, cada vez más, que ese era el deber ser. No soy tonta, sabía que eso podía provocar mi suspensión y tuvo un costo mayor del que esperaba. Pero era mi deber. Para eso estudié y por eso me juramenté. La medida le correspondía a ese señor como a cualquier otro ciudadano. Era su derecho.

-¿Qué responde a la acusación de que fue sobornada?

-Que lo prueben, que lo prueben. No hay manera de demostrar algo que nunca ocurrió.

-¿Por qué, entonces, no se procedió a darle la libertad a Cedeño antes?

-El expediente estuvo mucho tiempo en los tribunales y pasó por muchos jueces. Cuando me llegó tenía 278 piezas y demoré dos semanas, 12 horas diarias, revisando acta por acta. Ahí detecté una serie de graves irregularidades y yo no me iba a ser cómplice de las anomalías de otros jueces, de fiscales y de magistrados de las cortes de apelaciones, de las salas de Casación Penal y Constitucional. A ese señor no hubo un derecho que no se le violara a pesar de no estar involucrado en ningún ilícito. El expediente me llegó por causas que desconozco, le puse orden y le otorgué la medida que le correspondía de pleno derecho. Y lo hice sin que la ONU me lo pidiera.

-Dice usted que no se imaginó la magnitud de la consecuencia que su decisión le iba a producir.

-Jamás imaginé que ordenarían mi detención 15 minutos después de dictar la decisión. No pensé que la violación al Estado de Derecho llegara a tal extremo. Supuse que me separarían del cargo, investigarían y determinarían que no hubo corrupción o abuso de poder. Ahora, si ese es el costo político, asumo las consecuencias con la conciencia tranquila.

-¿Justifica usted la fuga de Cedeño?

-Hoy por hoy lo entiendo porque sé que, si yo no hubiese conocido el caso, ese señor estaría preso todavía.

-¿No se burló de su buena fe al escaparse?

-No lo siento así. ¿Qué habría pasado si no me detienen? No sé si se hubiera ido del país. Pero mi detención se produjo 15 minutos después de su liberación y seguramente se enteró. Entonces yo también habría buscado la manera de irme. No olvide que tenía tres años detenido sin ningún elemento en su contra. Yo cumplo mañana siete meses de prisión, pero no sé qué pensaré dentro de tres años si continúo aquí.

-¿Fue el caso de Cedeño la primera vez que se interfirió en una decisión suya?

-Nunca, ni el Cicpc, como consultora jurídica, ni como jueza, sufrí ningún tipo de presión. En este caso nadie me dijo que debía hacer o dejar de hacer, pero no era un secreto en el medio judicial que quien recibiera ese expediente debía mantener detenido a Cedeño. En el Palacio de Justicia hay un grupo de jueces que acata las órdenes y conoce los expedientes políticos. Yo no formaba parte de ese grupo y para mí fue una sorpresa recibir un expediente que no me tocaba (no estaba de guardia) luego de un sorteo manual. Era extraño porque nunca me llegó un caso político y no era de la confianza de la presidenta del Circuito, ni de la presidenta del TSJ.

-¿Por qué, si usted no era del grupo complaciente, le asignaron el caso?

-Lo desconozco. Pero ellos sí sabían que actuaría ajustada a derecho.

-Quizás hay jueces que no necesitan recibir órdenes para actuar según los intereses del Gobierno porque adivinan lo que se quiere de ellos. O simplemente se le montó a usted una trampa.

-Yo no estaba para complacer los deseos del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Moral, que es el que manda más ahora. No sé qué trampa me podían montar. A menos que supieran que cerrarían el caso en la audiencia preliminar o que revisaría la resolución de la ONU, que pasó por muchas manos sin que nadie la tomara en cuenta.

-Por lo que ha dicho, no forma parte usted del grupo de jueces que corearon "uh...ah...Chávez no se va..."

-En otra época, cuando se iniciaba el año judicial, todos los jueces éramos invitados. Luego ese acto se volvió elitescos y nos mandaban a decir que si no estábamos invitados no fuésemos. De manera que no participé en ese episodio. Pero en otra oportunidad asistí a una actividad electoral en el TSJ y también se coreó el uh...ah. Allí cuatro o cinco jueces no lo hicimos y ahora ninguno de nosotros está en el Poder Judicial.

-¿A qué atribuye los atentados contra su vida ocurridos en la cárcel?

-Si usted me pregunta qué siento por la jueza que dictó la medida privativa de libertad en mi contra, le puedo decir que cariño no es. Me invade la rabia y la impotencia por la injusticia. Así que aquí nadie puede sentir afecto por mi persona porque yo represento la medida privativa de libertad de muchas internas, incluso las condenatorias. Cuando llegué había más de 24 procesadas y condenadas por mí. Quedan 14 todavía y no soy de su agrado. En los penales las personas se dividen en población y gobierno. Gobierno son las autoridades del penal y población las internas. Yo no pertenezco a ninguno de los dos y eso genera incomodidad en ambas partes. Constantemente me insultan y si las personas que intentaron agredirme fueron trasladadas, siempre hay una nueva.

-Está usted aislada.

-Estoy en una de 7 celdas a lo largo de un pasillo cerrado con candado. Aquí hay 23 internas por comisión de diversos delitos. Y la única que no puede salir soy yo. Así que permanezco en mi celda, de dos por tres metros, las 24 horas del día.

-¿Cómo está su ánimo? ¿No siente opresión, claustrofobia, depresión?

-Es como un electrocardiograma. A veces tengo el pico alto y a veces bajo. Es difícil. Los primeros días me sentí afectada por el encierro permanente y quería salir corriendo. Pero ya lo superé. Es increíble a lo que se puede acostumbrar el ser humano. A veces me visitan dos o tres internas. Tengo televisor, pero no hay señal. Por eso mi vida es el BlackBerry. Es mi contacto con el mundo exterior.

-Si lo esconde es porque se lo prohíben.

-Aquí todas tienen celular, pero a mí me lo quitan. Este, por el que estoy hablando, es el quinto que ingreso al penal. Y sí, soy una molestia por el Twitter. Cuando hay noticias que no agradan al Ejecutivo arrecian las requisas. Ayer ocurrió con lo del Parlamento Europeo. Pero yo les digo: "quítamelo que mañana ingreso otro".

Roberto Giusti
EL UNIVERSAL
11/7/2010

LLAMAMIENTO URGENTE CONJUNTO DE LOS RELATORES ESPECIALES SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS; SOBRE EL DERECHO DE TODA PERSONA AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL; SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADO CON EL CASO DE LA EX JUEZA MARÍA LOURDES AFIUNI MORA

1. Vista la información solicitada en el llamamiento urgente Ref. AL VEN 11/2020 suscrito por los Relatores Especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en relación con el supuesto acoso judicial contra la ex jueza María de Lourdes Afiuni, el Estado venezolano tiene a bien brindar la siguiente información.
2. La señora María de Lourdes Afiuni fue condenada mediante sentencia del 16 de mayo de 2019, por el Tribunal 17° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a cinco años de prisión, por la comisión del delito de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción con las agravantes contenidas en el artículo 77, numerales 1 y 5 del Código Penal. Los hechos que dieron lugar al proceso penal y posterior condena se relacionan con las violaciones a la ley cometidas por la referida señora mientras se desempeñaba como Jueza del Tribunal 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
3. Afiuni, en su condición de Jueza 31° de Control de Caracas, el 8 de diciembre de 2009, celebró una audiencia sin la presencia del Ministerio Público y en violación de las disposiciones normativas vigentes, en la cual irregularmente levantó la medida privativa de libertad que pesaba sobre el señor Eligio Cedeño, quien estaba procesado por la presunta comisión de los delitos de distracción de recursos, obtención ilícita de divisas y contrabando. Luego ser liberado por la ex jueza Afiuni, éste huyó del país.
4. El proceso contra la señora Afiuni se desarrolló con pleno respeto a todas las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, reconocidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos relevantes. La causa se inició el 10 de diciembre de 2009, cumpliendo con las etapas y fases establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, sin que haya existido incidencia extraordinaria que vaya más allá del normal desarrollo de esta causa. Desde el 8 de febrero de 2011 la señora Afiuni fue objeto de medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad “...por razones de salud y humanidad”.
5. En ejercicio del derecho a la doble instancia, la defensa de la señora Afiuni ejerció los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para cuestionar la decisión adoptada por el tribunal de juicio. Dichos recursos fueron tramitados conforme a las normas aplicables, siendo debidamente decididos por los tribunales competentes.

6. En efecto, el 15 de octubre de 2019 la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la decisión de primera instancia. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2020 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 114, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de la señora Afiuni.
7. El proceso penal contra la señora Afiuni no puede considerarse como un caso de represalias por haber supuestamente aplicado una opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Como ha sido ampliamente demostrado ante el citado Grupo de Trabajo, en ningún momento ex jueza Afiuni aplicó o invocó pronunciamiento alguno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
8. En fecha 21 de septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo conforme a su práctica habitual, remitió a la Misión Permanente de Venezuela la Opinión Nro. 20/2010 adoptada por el Grupo el 1ro de septiembre de ese año. En el párrafo 36, dicha Opinión¹ estableció lo siguiente:

"36. A pesar que la fuente sostiene que la libertad del reo fue dispuesta por la Jueza "basándose en la Opinión Nro. 10/2009" lo cierto es que tanto la Jueza como el Gobierno coinciden en que ello no fue así." (Destacado añadido)

9. Esta posición es consistente con las pruebas que cursan en el expediente del presente asunto en el orden interno y en el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, en el acta de presentación² ante el Juzgado 50 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el folio ochenta y uno (81) se observa que la señora Afiuni manifestó lo siguiente:

*"... siempre hay una persona encargada de hacer boletas, la secretaría tiene que terminar de imprimir el acta, la señora Ana yo le dije que me imprimiera una Boleta de Excarcelación, que se había acordado una medida de presentación cada 15 días, y prohibición de salida del país, la secretaría estaba terminando de pulir el acta porque ella no había entendido muy bien lo de la ONU, y yo le dije, **yo no estoy decidiendo en base a la ONU, estoy decidiendo en base a mi Constitución**".* (Destacado añadido)

10. Asimismo en una entrevista³ brindada al diario El Universal, en fecha 11 de julio de 2010, la señora Afiuni declaró expresamente que: *"El expediente me llegó por causas que desconozco, le puse orden y le otorgué la medida que le correspondía de pleno derecho. Y lo hice sin que la ONU me lo pidiera."*

¹ Anexo 1

² Anexo 2

³ Anexo 3

11. Como resultado de toda la información aportada por el Estado, el Grupo de Trabajo en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en el año 2020 (A/HRC/45/16) excluyó el caso de la señora Afiuni de los supuestos de represalia, corrigiendo así el error cometido por dicho Grupo en informes anteriores.
12. Por otra parte, en relación con la situación de salud de la señora Afiuni, se reitera que la referida señora no se encuentra privada de libertad, por lo cual puede acceder a toda la atención médica y tratamientos que resulten necesarios, a través de profesionales de la medicina de su libre elección.
13. En ese sentido, los señalamientos de “*acoso judicial*” proferidos por los Relatores Especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, resultan completamente alejados de la realidad y demuestran la falta de objetividad de estos procedimientos especiales en el desempeño de su mandato, así como una violación del Código de Conducta aprobado por el Consejo de Derechos Humanos que señala:

“Artículo 3. Principios de Conducta Generales.

Los titulares de mandatos son expertos independientes de las Naciones Unidas. En el desempeño de su mandato, deberán:

- a) *Actuar a título independiente y **ejercer sus funciones de conformidad con su mandato, mediante una evaluación profesional e imparcial de los hechos basada en las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas**, sin ningún tipo de influencia, incitación, presión, amenaza o injerencia externa, ya sea directa o indirecta, de parte alguna, sea o no parte interesada, y por motivo alguno; el concepto de independencia está vinculado a la condición de los titulares de mandatos y a su libertad de evaluar las cuestiones de derechos humanos que deben examinar en virtud de su mandato;*
- b) *Tener presente el mandato del Consejo, que es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, mediante el diálogo y la cooperación, como se especifica en la resolución 60/251 de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006;*
- c) ***Ejercer sus funciones de acuerdo con su mandato** y de conformidad con el Estatuto, así como con el presente Código;*
- d) ***Centrarse exclusivamente en la realización de su mandato, teniendo presente en todo momento la obligación fundamental de actuar con la veracidad**, la lealtad y la independencia que exige su mandato;*

e) Demostrar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, entendiéndose por ello, en particular, pero no exclusivamente, la probidad, la imparcialidad, la equidad, la honradez y la buena fe;

f) No solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, particular, organización gubernamental o no gubernamental o grupo de presión en absoluto;

g) Adoptar en todo momento una conducta acorde con su condición;

h) Ser conscientes de la importancia de sus deberes y responsabilidades, tomando en consideración la naturaleza particular de su mandato y comportándose de modo tal que se mantenga y refuerce la confianza depositada en ellos por todos los interesados;

i) Abstenerse de aprovechar sus cargos o los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones para obtener beneficios personales, ya sean financieros o de otro tipo, o para favorecer o causar perjuicios a familiares, asociados cercanos o terceros;

j) Abstenerse de aceptar honores, condecoraciones, favores, obsequios o remuneración de fuente gubernamental o no gubernamental alguna por actividades llevadas a cabo en el desempeño de su mandato.

14. En el presente caso, resulta evidente que la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, se encuentra actuando fuera de su mandato establecido en la Resolución 6/29, especialmente tomando en cuenta que procede a involucrarse y pronunciarse en un caso de naturaleza penal, considerándolo como una “*persecución judicial*” o un supuesto de represalia o intimidación contra operadores de justicia.
15. Por su parte, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados da una muestra más de su histórica parcialidad contra la República Bolivariana de Venezuela. Dicha parcialidad lo llevó en el pasado a excusarse de participar en los procesos relacionados con Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
16. Lejos de lo afirmado por los Relatores, la situación de la señora Afiuni constituye un caso de aplicación del derecho frente a un supuesto de hecho debidamente tipificado como delito en el ordenamiento jurídico, todo ello a través del procedimiento legalmente dispuesto para tal fin, por parte de una autoridad competente e imparcial, en plena conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables.
17. El Estado venezolano, en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales continuará colaborando con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en sus respectivos

mandatos, métodos de trabajo y de conformidad a lo estipulado en el Código de Conducta consagrado en la Resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos.